

Análisis de la extensión rural en el marco de la Alianza para el Campo. Un estudio de caso del sureste de Coahuila, 1996-2007

PABLO TORRES LIMA
HERIBERTO MARTÍNEZ LARA

RESUMEN

Se analiza la experiencia de los campesinos y extensionistas del sureste de Coahuila, en el marco de los programas de la Alianza para el Campo, periodo 1996-2007. De junio a julio de 2010 se encuestaron a 53 productores de 34 localidades rurales, se entrevistaron a siete extensionistas participantes. Se analiza el perfil socioeconómico y agrario de los campesinos, sus actividades económicas y opinión sobre su participación en los programas. Asimismo, se revisa el perfil profesional de los extensionistas, las opiniones acerca de su participación y de las áreas de mejora que identificaron en los programas de asesoría técnica. Finalmente, se presentan líneas de análisis de la experiencia sobre extensionismo rural desde la perspectiva del cambio socio-productivo e institucional, como parte de los procesos de desarrollo rural.

Palabras clave: extensión rural; Alianza para el Campo; capacitación; programas; Coahuila.

INTRODUCCIÓN

México es un país con profundas desigualdades socioeconómicas, en las cuales se encuentran amplios sectores de población extremadamente pobres y grupos reducidos considerablemente ricos. Destaca el hecho de que en nuestro país se siguen otorgando mayores apoyos y recursos al desarrollo de los sectores industrial y servicios, dejando a un lado al agropecuario, situación que se refleja en el limitado desarrollo del sector rural, así como se ha perdido la oportunidad de llevar a la práctica los postulados del desarrollo sustentable, limitando la posibilidad de diseñar estrategias de desarrollo rural que fomenten y privilegien el valor de la persona y la protección de los ecosistemas.¹

Fecha de recepción: 13 de junio de 2011. Correo electrónico: ptorres@correo.xoc.uam.mx.

¹Yurjevic, A., "El desarrollo rural en la perspectiva del desarrollo sustentable", consultado el 6 de septiembre de 2010 en: http://www.clades.cl/documentos/ima_doc/desrural.pdf.

Se ha demostrado que el extensionismo rural, a través de las estructuras organizacionales y burocráticas de los propios programas, ha dejado de lado el papel relevante que la educación tiene para las personas y la agricultura. La nula consideración del impacto educativo de los programas de extensión y de los propios extensionistas como educadores se refleja en la ausencia de cambios sociales democráticos que se dirijan hacia la construcción de sociedades regionales más equitativas.²

Este retroceso se hizo evidente en la estrategia que utilizó el Estado en la segunda mitad de los noventa cuando se ofrecía un extensionismo que atendía no sólo aspectos de carácter tecnológico, sino también organizativo y de gestión social bajo el requerimiento de la participación comunitaria. En aquel entonces, el esquema de contratación para los extensionistas rurales consistía en garantizarles un contrato anual y un pago mensual.

En nuestros días, esa estrategia de participación gubernamental ha quedado en el olvido, hoy al extensionista se le denomina Prestador de Servicios Profesionales (PSP) y se le paga por servicio autorizado, sin embargo, estos servicios son bastante limitados en cuanto al apoyo que pueden brindarle a la población rural. Actualmente, si al técnico no se le garantiza un ingreso suficiente en un proyecto, tendrá que buscarlo en otros, lo que está ocasionando que año con año tengan que elaborar diferentes proyectos para completar su ingreso olvidándose de los del año anterior, con el consecuente fracaso de los primeros por falta de seguimiento, evaluación y el cabal cumplimiento de la asesoría técnica.

De esta forma, en México la estrategia de los programas públicos de extensionismo rural no garantiza la continuidad de los apoyos desde la promoción de las actividades productivas básicas hasta la consolidación de nuevas empresas rurales, no responde a las demandas de generación de conocimiento nuevo y de los sistemas de innovación tecnológicos regionales. Mucho menos impulsa procesos sostenidos encaminados a mejorar integralmente las condiciones geográficas, técnico-productivas y socioeconómicas de la población rural, es decir, no promueven importantes elementos del desarrollo rural.³

La debida atención a los problemas anteriores, es parte ya de la promoción contemporánea a escala internacional de nuevas estrategias de desarrollo rural,^{4,5} particularmente de los retos emergentes de la crisis ambiental y los modelos económicos vigentes en el mundo. En este sentido, para que la agricultura satisfaga las metas de viabilidad económica, integridad ambiental y la producción de servicios ecosistémicos más allá de los productos agrícolas (alimentos, fibras, combustible, etcétera) se requiere un enfoque integral, holístico desde los sistemas de investigación y extensión agrícola que sea de largo plazo y geográficamente posible.⁶

²Zacharakis, J., "Extension and community: The practice of popular and progressive education", en *New Directions for Adult and Continuing Education*, 2008, 117:13-23.

³OCDE, *Estudios de política rural*, México. OCDE, Francia. 2007.

⁴Bjørnar, S., "Agricultural extension services and rural innovation in inner Scandinavia", en *Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography*, 2010, 64(1):1-8.

⁵Quirós, C. et al., "Colombia, Latin America and the Spread of Local Agricultural Research Committees (CIALS): Extension Through Farmer Research", en W. Rivera y G. Alex (eds.), *Demand-Driven approaches to agriculture extension. Case Studies of international initiatives*, Agriculture and Rural Development, Discussion Paper 10, The World Bank, Washington. 2004, p 10-16.

⁶Robertson, P. et al., "Long-term agricultural research: A research, education, and extension imperative", en *BioScience* 2008, 58(7):7640-645.

En el presente trabajo se analiza en qué condiciones los gobiernos federal y estatal otorgan los servicios de capacitación, organización y asistencia técnica a los campesinos rurales bajo el marco físico natural y socioeconómico de la región sureste de Coahuila, excelente estudio de caso considerando que en ella se generó una experiencia de extensión rural participativo en diversos ejidos, donde se combinaron las metodologías de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y de un modelo silvoagropecuario propuesto por el Centro Piloto del Semidesierto para el Desarrollo Rural Sustentable.⁷ El presente trabajo recoge las opiniones de los principales protagonistas de esta experiencia, los campesinos y extensionistas, lo cual permite identificar la valoración que cada uno de ellos tiene acerca de la propia extensión rural. De esta forma, como parte de las nuevas tendencias a escala internacional de llevar a cabo evaluaciones de los sistemas de extensión rural,⁸ en este trabajo se destaca la atención que reciben en esta materia los campesinos del sureste de Coahuila, México, en el marco de los programas de desarrollo de Alianza para el Campo.⁹

⁷ UAAAN Y SEMARNAP, *Centro piloto del semidesierto para el desarrollo rural sustentable*, mimeo, Coahuila, 1996.

⁸ Swanson, B. y Rajalahti, R., "Strengthening agricultural extension and advisory systems: Procedures for assessing, transforming, and evaluating extension systems", en *Agriculture and Rural Development*, Discussion Paper 45, The World Bank, Washington, 2010.

⁹ La Alianza para el Campo tiene su origen en la Alianza para la Recuperación Económica que se suscribió en octubre de 1995 con los "representantes" de los sectores productivos del país. La justificación para incluir al sector agropecuario en la estrategia de la Alianza para la Recuperación Económica consistió en que por su historia e importancia económica, el campo es fundamental para el desarrollo de México, en virtud de que ocupa grandes rezaños que se deben subsanar y de profundas injusticias que se deben corregir. Los objetivos planteados en la Alianza para el Campo eran: a) Aumentar progresivamente el ingreso de los campesinos; b) Incrementar la producción agropecuaria a una tasa superior a la del crecimiento demográfico; c) Producir suficientes alimentos básicos para la población, y d) Fomentar las exportaciones de productos del campo. Por su parte, el secretario del ramo agropecuario a estos objetivos agregó el de combate a la pobreza.

Las estrategias para cubrir tales propósitos fueron: a) Facilitar el acceso a nuevas tecnologías; b) Fomentar la capitalización del campo, y c) Promover la calidad de sus recursos humanos a través de la capacitación. De acuerdo con la justificación, objetivos y estrategias que planteó el gobierno federal, se puede aseverar que el programa no estuvo orientado hacia el desarrollo rural, limitándose a un planteamiento productivista y de recuperación económica. No se explicita en ningún momento un diagnóstico amplio y serio de la situación que guardaba el sector rural, en el discurso se dice que existían rezagos e injusticia, pero no se reconoce una población creciente en niveles de pobreza y extrema pobreza. Inclusive, no se menciona entre los objetivos de la Alianza el combate a la pobreza. Por otra parte, se observa que el tema del medio ambiente no se plantea como una prioridad, privilegiando el enfoque productivista sobre el de desarrollo sustentable.

En el periodo de 1996 a 2007, la Alianza para el Campo, junto con PROCAMPO, fue uno de los programas estratégicos del gobierno federal encaminado a apoyar al sector rural de nuestro país. Operó en el marco del federalismo, otorgando recursos públicos, funciones y programas a los gobiernos estatales, promoviendo la participación de los tres niveles de gobierno y los campesinos para la determinación de las prioridades del sector a escala regional y estatal, la definición de programas, de aportación y manejo de los recursos públicos. Los programas de la Alianza para el Campo pretendían otorgar apoyos dirigidos a integrar al productor primario a procesos de transformación y agregación de valor de las cadenas productivas.

Para su instrumentación, se estableció un arreglo institucional en cada entidad federativa que consistió en: a) El reforzamiento de los Consejos Estatales Agropecuarios como instancias de concertación política y toma de decisión, integrados por representantes de los campesinos, de los gobiernos federal y estatal, presididos por este último; b) Fondos fiduciarios creados por los gobiernos estatales para administrar conjuntamente las aportaciones de la federación y de los gobiernos estatales, y c) Las Fundaciones Produce para impulsar la investigación aplicada y la transferencia tecnológica. También se propuso la aplicación de cuatro líneas estratégicas: a) El desarrollo de cadenas productivas; b) El desarrollo de territorios regionales; c) La promoción a grupos prioritarios, y d) La atención a factores críticos como suelo y agua.

El programa se dirigió a toda persona física o moral que de manera individual o colectiva, realizara actividades en el medio rural. Se clasificaron tres tipos de campesinos: a) Campesinos de bajos ingresos, en zonas marginadas, b) Campesinos de bajos ingresos, en transición, y c) Resto de campesinos. Conforme a las disposiciones establecidas en el decreto del presupuesto de egresos en los años que operó, por lo menos 50% de los beneficiarios debían corresponder al sector social.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Consistió básicamente en la obtención, revisión y análisis de información bibliográfica referente a los antecedentes del extensionismo en México, el marco físico-natural y sociodemográfico de Coahuila y la región sureste del estado, incluyendo datos de SAGARPA respecto a la importancia económica de las principales actividades agropecuarias. También se consultó documentación relativa al marco normativo y operativo de los programas que sobre extensionismo rural y asistencia técnica instrumentaron los gobiernos federales y de Coahuila en el periodo 1996-2007, en el contexto de la Alianza para el Campo.

La investigación de campo consistió en el diseño y aplicación de dos tipos de cuestionarios para la obtención de información directa de campesinos y extensionistas participantes. El uso de cuestionarios en la evaluación de las políticas, programas y servicios de extensión rural se ha validado como un instrumento útil para estos propósitos.^{10, 11} Los principales criterios de análisis incluidos en las encuestas consistieron en los siguientes:

- 1) Para los campesinos se caracterizó su perfil general y agrario, se identificaron las principales actividades económicas a las que se dedican, qué nivel tienen de autoconsumo y comercialización de su producción, y se consultó sobre:
 - a) Su participación en los programas, respecto de los servicios recibidos, proyectos apoyados, beneficios e impactos alcanzados, y

En Coahuila los principales programas con que inició la operación, en 1996, fueron: Ferti-irrigación; Establecimiento de Praderas, Mecanización, Programa Lechero, Ganado Mejor, Sanidad Animal, Sanidad Vegetal, Mecanización, Transferencia de Tecnología, Kilo por Kilo, Apoyo al Desarrollo Rural y el Sistema Nacional de Capacitación y Extensión Rural Integral (SINDER), entre otros.

La estrategia para la aplicación de los subsidios definida por la Alianza consistió en aportar un porcentaje de los montos totales que representa la adquisición, obra o inversión sujeta del apoyo. El porcentaje de apoyo estaba en función del programa en cuestión, por ejemplo, en 1998 los apoyos se otorgaron de acuerdo con los criterios siguientes: a) En el Programa Establecimiento de Praderas el apoyo fue de hasta 50% del costo total del proyecto apoyado; b) En Mecanización el subsidio fue de hasta 30% del precio de lista de los tractores; c) En Ferti-irrigación llegó a ser hasta de 45% del costo total por ha; d) En Ganado Mejor el apoyo gubernamental fue hasta de 49% del costo total del semental bovino o de 47% del semental caprino. En inseminación artificial fue 50% de su costo; e) En el Programa Kilo por Kilo el apoyo fue de 50% el costo de la semilla (frijol, maíz y trigo); f) En los Programas de Apoyo al Desarrollo Rural el subsidio fue variable y dependía de cada componente que lo integraba, por lo que los porcentajes de apoyo iban de 50 al 70% del costo total del proyecto y cuando se trataba de beneficiarios que pertenecían a los grupos prioritarios, el apoyo llegaba a ser hasta de 90%, y g) En el caso de SINDER, el apoyo gubernamental fue de 100%.

Las reglas de operación de la Alianza consideraban que al menos 50% de los beneficiarios de los programas debían corresponder a campesinos del sector social. Sin embargo, hay que hacer notar que se refiere al número de beneficiarios no al presupuesto ejercido, lo que dejó abierta la posibilidad de ejercer más recursos en los proyectos de los campesinos de mayores ingresos. Cabe destacar que la Alianza para el Campo, del conjunto de programas que operó, contaba con un grupo que estaban dirigidos fundamentalmente a los campesinos de mediano y bajo ingreso. Estos programas se denominaban de desarrollo rural, los cuales consideraban montos y porcentajes de apoyo preferenciales para los campesinos de menos ingresos. De hecho, en 2010 el Programa para la Adquisición de Activos Productivos mantuvo un trato preferencial en los montos y porcentajes de apoyo para los campesinos de menores ingresos, por ejemplo, para ese mismo año en Coahuila, el componente agrícola para la adquisición de un tractor, el apoyo consideró un precio máximo de \$350,000, los porcentajes y montos de apoyo (lo que se cumpla primero) dependían del tipo de productor conforme a su nivel de capitalización derivado de su posesión actual de activos productivos, los apoyos podían ser de \$262,500 o 75% si se trataba de campesinos de bajo o nulo nivel de activos, de \$175,000 o 50% si eran campesinos de nivel medio, y de \$140,000 o 40% si eran de nivel alto. Este programa sustituyó al Programa de Alianza para el Campo o Alianza Contigo a partir de 2008. También consideró el concepto de regionalización el cual toma en cuenta el nivel de desarrollo de las diferentes regiones y localidades de cada estado, definiendo también tres estratos: a) Localidades de alta y muy alta marginación; b) Localidades de marginación media, y c) Localidades de baja y muy baja marginación.

¹⁰Adesoji, S., "Assessment of agricultural extension agents' marketing-related services: implications for policy makers" en Ekiti State, Nigeria. *Journal of Agricultural & Food Information*, 2009, 10(4): 334-347.

¹¹Shabanali, F. et al., "Principal components of policy framework for sustainable agriculture and its implications for national extension system" en Iran. *Journal of Sustainable Agriculture*, 2007, 31(2): 125-144.

b) De la valoración que tienen de cada programa, sobre el desempeño de los extensionistas y del papel que deben tener los programas y asesores técnicos.

2) A los extensionistas se les consultó sobre su perfil profesional y opinión de los programas en los que participaron, se les preguntó sobre aspectos laborales y la materia de trabajo que les correspondió atender, cuáles fueron los resultados e impacto de las funciones que desempeñaron, se les pidió que valoraran cuáles programas brindaban mejores condiciones para desempeñar sus funciones y cuáles consideraban que debían realizar, además, las condiciones que debían ofrecerles los programas actuales para mejorar su participación.

Durante los meses de junio y julio de 2010 se encuestaron a 53 campesinos de 34 localidades rurales diferentes del sureste de Coahuila, es decir, productores de la mayoría de las comunidades atendidas por el Programa Elemental de Asistencia Técnica (PEAT) y el Programa de Capacitación y Extensión (PCE) del Sistema Nacional de Capacitación y Extensión Rural Integral (SINDER) desde 1996. Uno de los criterios utilizados para seleccionar a los campesinos entrevistados fue que hubieran participado en todos o la mayoría de los programas que se analizan en este trabajo, por ello resulta razonable que entre los campesinos entrevistados encontremos sólo a personas del sexo masculino, pues en la gran mayoría de los casos son los titulares de las Unidades de Producción Rural (UPR).

Asimismo, para efectos de representatividad, se entrevistó a personas que tuvieran cuando menos 36 años de edad, en virtud de que se consideró que al ser SINDER el primer programa analizado, inició operaciones en 1996, por lo que en aquel entonces tendrían 22 años. También se consideró que poco más de tres quintas partes de las personas fueran mayores de 50 años, que de alguna manera responde al promedio nacional sobre la edad de los campesinos, 54% de los campesinos cuenta con 50 años o más.

Para el caso de los técnicos sólo fue posible encontrar a siete profesionistas que participaron en todos o la mayoría de los cuatro programas de extensionismo rural y asesoría técnica. La gran mayoría de los extensionistas que colaboraron en SINDER, ya sea en PEAT o PCE, dejaron de trabajar en los programas de SAGARPA desde hace muchos años.

CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA Y SOCIODEMOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO

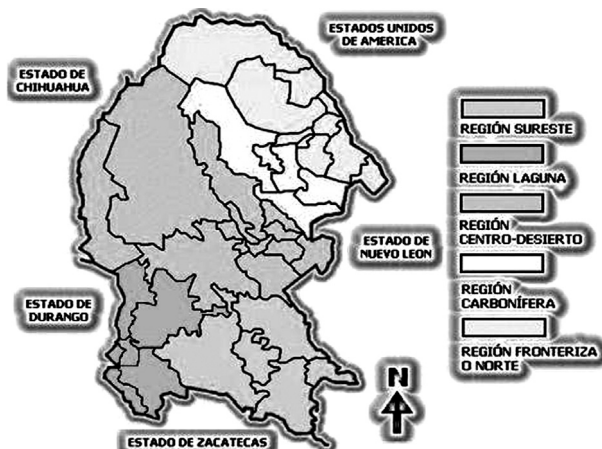
El estado de Coahuila representa 7.71% de la superficie del país, ocupa el tercer lugar en extensión territorial y comprende una superficie de 151,563 km². Las principales actividades económicas del estado se orientan a la industria manufacturera, siderurgia, minería, construcción y los servicios. Todas las actividades con excepción de las primarias, en 2008 conformaron 97.2% del Producto Interno Bruto (PIB) de Coahuila, es decir, las actividades primarias sólo aportaron 2.8% del valor generado.

En el mismo sentido, las actividades no primarias generan 95% de los empleos y sólo 5% se dedica a las actividades agropecuarias. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2005 la población total del estado era de poco menos de 2.5 millones de habitantes, correspondiendo 10% a población rural. El estado se divide en cinco regiones geográfico-económicas: Laguna, Sureste, Centro-Desierto, Norte y Carbonífera. Está constituido por 38 municipios que integran a 3,938 localidades de las cuales, 98.9% se consideran rurales por tener menos de 2,500 habitantes.

De los 38 municipios que conforman el estado dos se consideran metropolitanos, seis urbanos, ocho semiurbanos, y 22 rurales.¹² En 2005, en los dos municipios metropolitanos (Saltillo y Torreón) se concentraba 49.2% de la población donde se desarrollan las principales actividades industriales y de servicios en el estado. De acuerdo con información del segundo trimestre de 2010, Coahuila contaba con una población estimada de 2,651,981 habitantes, de los cuales 73.9% son mayores de 14 años, es decir, cuentan con edad para trabajar. De estas últimas, 58.5% (1,145,271 personas) corresponden a la Población Económicamente Activa (PEA), 91.9% se encuentran ocupadas, y de éstas, 5% (52,171 personas) se dedican a actividades agropecuarias, 96.3% son hombres y 3.7% mujeres.¹³

La región sureste de Coahuila ocupa una extensión territorial de 26,751.8 km², lo que representa 17.6% de la superficie total del estado. Comprende los municipios de Arteaga, General Cepeda, Parras, Ramos Arizpe y Saltillo. En materia agrícola, los cultivos predominantes son: maíz, forrajes, frijol, manzana, en menor magnitud trigo y diversas hortalizas y frutales. Respecto a la ganadería, las principales especies que se explotan son: caprinos, bovinos, ovinos y aves. En lo forestal las especies no maderables que se explotan son: lechuguilla, candelilla, cortadillo y nopal (ver figura 1).

FIGURA 1. REGIONES DE COAHUILA



Fuente: INEGI, 2009.

¹²Gobierno del estado de Coahuila, *Plan Estatal de Desarrollo 2000-2005*, Coahuila, México, 2000, p. 3.

¹³Ídem.

El desarrollo de la región sureste de Coahuila responde a factores y condicionantes relacionados con su desarrollo industrial y de servicios. La economía de la región se basa en la industria automotriz y metalmecánica, la construcción, el comercio y los servicios. En 2005, la población era de 781,000 habitantes, representaba 31.3% del total estatal, y se concentraban principalmente la ciudad de Saltillo (83.1%).

Es importante destacar que de 1990 a 2005 la población presentó un crecimiento de 45.2%, el mayor aumento lo registró Ramos Arizpe con 100.8% y Saltillo con 47.2%, lo cual es reflejo del crecimiento industrial y de servicios de la capital del estado y su área metropolitana. La PEA de los municipios de la región se distribuye en los diferentes sectores referidos en el cuadro 1. Destaca el municipio de General Cepeda con 84% de su población dedicada a las actividades primarias.

CUADRO 1. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SECTOR ECONÓMICO, MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SURESTE DE COAHUILA, 2005

Municipio	Primario	Secundario	Terciario	No especificado
Saltillo	0.9	44.6	51.1	3.4
Ramos Arizpe	2.9	58.5	35.7	2.9
Arteaga	6.7	44.1	44.8	4.5
General Cepeda	84.0	13.0	3.0	0.0
Parras	24.6	44.8	30.6	0.0

Fuente: *Diario Oficial de Coahuila*, 21 de abril de 2009.

La mayoría de los campesinos del sureste de Coahuila poseen poca superficie de tierra cultivable, que en ocasiones no les reporta ingresos necesarios para el sostén de sus familias teniendo que recurrir a ocupaciones alternativas para complementar el gasto familiar. En materia forestal, se aprovechan fundamentalmente especies no maderables como lechuguilla, palma, candelilla, orégano y heno. También existen pequeñas explotaciones de bosques de pino y cedro blanco.

En todos los municipios de la región se desarrollan en mayor o mayor medida actividades agropecuarias. En el periodo 2002-2008 en el Distrito Saltillo se cultivaron anualmente en promedio 80,000 hectáreas, de las cuales 26.5% fueron de riego y 73.5% de temporal. Parras con mayor superficie de riego en el distrito contó con 30.6%, seguido de Arteaga y Ramos Arizpe con 26.6 y 20.3%, respectivamente. Respecto a la superficie de temporal, Saltillo ocupa el primer lugar con 37.1% seguido de Arteaga con 29.4%, la participación de los otros tres municipios se ubica en el rango de 9.2 y 13.8%.

El valor de la producción ascendió a 1,259 millones de pesos promedio anual en el periodo de análisis, la superficie de riego aportó 85.3% de ese valor. Arteaga aportó 38.1% del total distrital seguido de Parras con 32.1%. La razón de la mayor participación de estos municipios es porque contribuyen con mayor superficie de riego. Entre los cultivos de temporal destacan dos que aportan 38.7% del valor de la producción distrital, la manzana 24.8% y el maíz grano 13.9%.

Respecto a los cultivos de riego sobresalen tres frutas: melón, nuez y manzana, que en conjunto participan con 50.6% del valor de la producción distrital, sigue la alfalfa y la papa con 12.2 y 10.4%, respectivamente. Otras 21 hortalizas aportan 13.4% de ese valor, entre las que destacan el tomate, la espinaca, el nabo, la zanahoria, el cilantro y la calabacita. En términos generales, el valor promedio anual de la producción agropecuaria del Distrito Saltillo en el periodo 2002-2008 fue de 2,118.4 millones de pesos de 2008, correspondiendo 40.6% a la producción pecuaria y 59.4% a la agrícola, estructura en algún grado opuesta a la estatal, pues la mayor participación la tiene la producción pecuaria con 77.5% del valor, el resto la agrícola.

El sureste de Coahuila refleja las dos modalidades extremas de producción agropecuaria nacional, la agricultura tradicional de la gran mayoría de los campesinos y la comercial que es producida por una minoría. La primera, del sureste de Coahuila, es poco productiva y básicamente de autoconsumo, el uso de tecnología es escaso, empleo prácticamente exclusivo de mano de obra familiar y en superficie de temporal, escasa precipitación (no rebasa en la mayoría de los casos 400 mm anuales) y bastante errática. La pequeña escala de producción genera condiciones de minifundio lo que se refleja no sólo en pequeñas extensiones de tierra, sino además en bajos niveles de producción y productividad, escaso o nulo acceso al mercado, a tecnología, financiamiento, capacitación y, en general, a oportunidades concretas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de los campesinos y sus familias.

En esta situación se encuentran los campesinos de Ramos Arizpe, General Cepeda, Saltillo y Parras y, en menor medida, los de Arteaga.

PROGRAMAS DE EXTENSIÓN RURAL Y CAMPESINOS EN EL SURESTE DE COAHUILA PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS

La totalidad de los campesinos entrevistados manifestaron haber participado en alguno o la mayoría de los programas objeto de análisis en este trabajo. 96% participó en PEAT, la totalidad en PCE, 87% en el Programa de Extensionismo y Servicios Profesionales (PESPRO) y 72% en el Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA). Los campesinos entrevistados que participaron en PEAT solamente lo hicieron en el pri-

mero de los cinco años que operó el programa, es decir, en 1996. Es en 2007 cuando coinciden en el programa la totalidad de los campesinos con una duración promedio de 3.1 años. PESPRO que sólo operó en 2001 agrupó a 87% de los campesinos. En el caso de PRODESCA, que operó de 2002 a 2007, los campesinos tuvieron una participación bastante irregular, el año de menor participación fue 2005 y el de mayor 2006. En conjunto tuvieron una participación promedio de 1.7 años en PRODESCA.

Debido a que PCE fue un programa que contrataba anualmente a los extensionistas que participaban atendiendo en promedio a la población rural de cuatro comunidades, encontramos que estos asesores técnicos se mantuvieron en la presencia de mayor número de campesinos y beneficiarios de proyectos. A partir de PESPRO la tarea fundamental de los técnicos fue identificar proyectos de inversión para los campesinos que atendían; en PRODESCA la contratación de los técnicos fue por petición explícita de los campesinos para la prestación desde uno hasta cuatro servicios profesionales que apoyaba este programa, por ello los campesinos tienen una menor permanencia en él.

Respecto a los apoyos que los campesinos recibieron de los asesores técnicos, bajo el marco de los diferentes programas analizados, ya sea en términos de elaboración de diagnóstico, asesoría técnica agrícola y pecuaria, apoyos a la organización, formulación de proyectos, gestión de apoyos, cursos de capacitación y, en menor medida, la asesoría administrativa y puesta en marcha de proyectos, se puede observar en el cuadro 2 que PCE es el que más presencia tuvo para los campesinos.

CUADRO 2. PARTICIPACIÓN DE CAMPESINOS EN TIPOS DE APOYO OFRECIDOS POR ASESORES TÉCNICOS EN DIFERENTES PROGRAMAS

Tipo de apoyo recibido de los asesores técnicos	Participación de campesinos en Programas (%)			
	PEAT	PCE	PESPRO	PRODESCA
Formulación de diagnóstico	55	92	63	47
Asesoría técnica agrícola	96	79	56	29
Asesoría técnica pecuaria	47	68	48	15
Organización	25	75	59	66
Cursos de capacitación y gestión de apoyos	23	85	65	87

Fuente: elaboración propia.

En relación con el número de proyectos¹⁴ con que fueron apoyados, 51% de los campesinos que participaron en PEAT manifiestan que el asesor técnico les formuló un proyecto con un promedio de 0.7 proyectos por productor, de los cuales 55% fueron de tipo agrícola y 42% pecuarios. De estas respuestas se deduce que existe una confusión en los campesinos, pues consideran el establecimiento de la parcela demostrativa y la aplicación del paquete sanitario caprino como proyectos agrícolas y pecuarios, lo que en términos estrictos no debe ser valorado así.

Respecto a PCE encontramos que 83% de los campesinos mencionaron haber sido apoyado con, al menos, un proyecto con una media de 1.4 proyectos por productor. Este promedio relativamente alto también es consecuencia de que el PCE tuvo una duración de cinco años aunque sólo en cuatro operó con comunidades bajo la metodología de SINDER. 44% de los proyectos fueron de tipo agrícola e igual porcentaje pecuarios. Como se aprecia, la mayoría de los proyectos se canalizaron hacia la producción primaria como es el caso de la adquisición de maquinaria e implementos agrícolas, construcción de bordos parcelarios, obras derivadoras de avenidas, adquisición de hatos pecuarios y construcción de corrales, entre otros, quedando prácticamente en el olvido los proyectos que consistían en agregarle valor a la producción agropecuaria. Esta situación se repitió en los años y programas que se sucedieron en el periodo de estudio.

Aunque sólo operó durante 2001, 61% de los campesinos que participaron en PESPRO mencionó que recibieron el apoyo de, al menos, un proyecto, el promedio fue de 0.8 proyectos por productor, 49% fueron de tipo agrícola y 40% pecuarios. En los proyectos agroindustriales se hace referencia al aprovechamiento de la manzana en licor y conservas, o en el aprovechamiento de derivados de la leche. Los de otros tipos se refieren a proyectos dirigidos a grupos de mujeres como talleres de costura, mercerías, etcétera. En el caso de PRODESCA, 92% de los campesinos que participaron mencionaron que fueron apoyados con al menos un proyecto con un promedio de 1.0 por productor. Los asesores técnicos que participaron en estos programas, a decir de los campesinos, también se limitaron a elaborar proyectos que priorizaban la producción primaria destacando que 51% fueron agrícolas y 37% pecuarios.

Respecto de la forma en como fueron contratados los técnicos en cada uno de los programas, en los casos de PEAT, PCE y PESPRO, todos los extensionistas fueron empleados por un periodo determinado y sólo en PRODESCA fue por servicio autorizado. Esta situación y no reconocerse como jefes de los extensionistas, son un indicativo de que los campesinos no fueron lo suficientemente informados por parte de los asesores técnicos y que además, tampoco leían los documentos que firmaban, como es el caso de los contratos, donde se indicaba que ellos se constituían en los patrones de los técnicos que contrataban.

También sobresale que en PEAT todos los campesinos reconocieron que no participaron en el pago del asesor técnico, en PCE la opinión es muy similar al reconocer que sólo 2% lo hizo en forma parcial. En el caso de PESPRO la tendencia se mantiene y únicamente 4% manifestó haber realizado algún pago al extensionista. En PRODESCA este

¹⁴Para evitar confusiones sobre la interpretación del promedio de proyectos por productor que se menciona, se aclara que dicho promedio sólo hace referencia a los campesinos que participaron en cada programa y no al total de los que fueron entrevistados.

porcentaje aumentó a 18%. De lo anterior se desprende que en los primeros tres programas, los ingresos que percibían los extensionistas provenían fundamentalmente de los programas ya que la mayoría de los campesinos reconoce que no hicieron pago.

Conviene reiterar que al inicio de SINDER se prohibió terminantemente a los extensionistas que le cobraran a los campesinos por los servicios que prestaban, siendo causa de despido si se desobedecía dicha instrucción. Esta situación fue del conocimiento de los campesinos y cuando se le permitió al técnico que acordará un pago complementario con los campesinos, el primero se negó a absorber dicha carga y el segundo prefirió conformarse con lo que el programa le pagaba.

OPINIÓN DE LOS PROGRAMAS

En relación con los beneficios que recibieron de cada uno de los programas en los que participaron, se desprende que PCE es el programa que mayores beneficios aportó a los campesinos (ver cuadro 3).

CUADRO 3. PARTICIPACIÓN DE LOS CAMPESINOS EN LOS TIPOS DE BENEFICIO DE DIFERENTES PROGRAMAS

Tipo de beneficio	Participación de campesinos en Programas (%)			
	PEAT	PCE	PESPRO	PRODESCA
Mejoramiento de conocimientos para la producción	90	64	54	45
Mejoramiento de rendimientos productivos	65	70	43	NR
Mejoramiento de su organización	27	81	70	71
Mejoramiento del manejo de ganado	20	79	59	60

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la pregunta ¿En cuál de los programas el extensionista tuvo un mejor desempeño?, 59% de los campesinos que participaron en PEAT mencionaron que el técnico resolvió problemas de carácter agrícola y 53% les proporcionó capacitación. En el caso de PCE, 87% mencionó que les brindó capacitación, 83% indicó que los apoyó para organizarse, 66% manifestó que elaboró proyectos que generaron ingresos económicos, 55% respondió que les resolvió problemas técnicos-agrícolas, y 51% realizó proyectos que generaron empleos.

En el caso de PESPRO, 72% mencionó que el técnico realizaba reuniones de capacitación, 70% refirió que los apoyó para organizarse y 52% que elaboró proyectos que generaron ingresos económicos entre otras menciones menos frecuentes, 71% de los campesinos que participaron en PRODESCA mencionó que recibió capacitación, 68% que les elaboró proyectos que generaron empleos, 60% que los apoyó para organizarse y 50% mencionó que elaboró proyectos que generaron empleos.

Al igual que en la consulta anterior, PCE es el programa donde los campesinos reconocen que el extensionista les brindó mejor apoyo, las diferentes actividades relacionadas con esta pregunta son mencionadas con mayor recurrencia en este programa. Destaca el dato de que 92% de los campesinos reconocen que el extensionista los apoyó en la gestión y obtención de recursos económicos para la instrumentación de sus proyectos, independientemente del programa en el que el asesor técnico participó, lo que constata el hecho de que los programas de extensionismo y capacitación estaban ligados con los programas de apoyo a la inversión.

Respecto del nivel de participación que los campesinos reconocen haber tenido en los programas encontramos respuestas muy similares en PEAT, PESPRO y PRODESCA donde poco menos de 40% refieren que fue amplia y poco más de la mitad moderada. En el caso de PCE, 58% consideran que su participación fue amplia. Estos resultados de alguna manera están asociados al hecho de que en PCE se buscaba que el extensionista se involucrara lo más posible en las diversas actividades de los campesinos. En relación con los procesos que fueron adoptados o mejorados por los campesinos por efecto de su participación en los programas, encontramos en el caso de PEAT, que 98% refiere haber mejorado sus procesos productivos.

En el caso de PCE 87% menciona que mejoró sus procesos organizativos y 72% sus procesos productivos. En el caso de PESPRO, 80% considera que mejoró sus procesos organizativos y 54% sus procesos productivos. Los procesos empresariales son poco mencionados y menos los procesos comerciales. Nuevamente PCE registra un mejor comportamiento sobre el resto de los programas.

Respecto de la valoración operativa que los campesinos le otorgan a cada uno de los programas, se encontró que a PEAT 82% lo califica entre muy bueno y bueno. Por su parte, a PCE 84% lo calificó del mismo modo. Mientras tanto, 67% los campesinos que participaron en PESPRO y 78% en PRODESCA los calificaron así. Aunque son pocas las referencias, destaca que PEAT y PRODESCA sean los dos programas que registren valoraciones negativas. El mayor tiempo que los extensionistas de PCE se mantuvieron en las comunidades parece ser un factor que contribuye a que los campesinos tengan una mejor valoración de este sobre el resto de los programas. En relación con el tipo de impacto que tuvieron los programas en los campesinos beneficiados, encontramos que 16% de los que participaron en PEAT lo considera positivo y de larga duración, en tanto que 78% también lo considera positivo pero de corta duración. En el caso de PCE, todos consideran que fue positivo aunque 38% considera que fue de larga duración y 62% de corta. En PESPRO 17% considera que fue positivo de larga duración, 67% lo valora como positivo de corta. Finalmente, 34% de los campesinos que participaron en PRODESCA consideran que fue positivo y de larga duración y 55% que fue positivo pero

de corta duración. Destaca el hecho de ningún productor refiera que la presencia de los asesores técnicos hubiera causado algún impacto negativo en la comunidad o grupo de campesinos en los que tuvo participación. También sobresale que de los cuatro programas, sea PCE al único que la totalidad de los campesinos lo considera, en algún grado, de impacto positivo.

Respecto de la valoración que hacen los campesinos del desempeño de los extensionistas y asesores técnicos, 80% de los que participaron en PEAT lo valora entre muy bien y bien. A los técnicos que participaron en PCE 81% de los campesinos los calificaron de la misma manera. En el caso de PESPRO 63% calificó a los técnicos en el mismo sentido, mientras que los campesinos que participaron en PRODESCA fue 74%. Aunque son mínimas las menciones, nuevamente son PEAT y PRODESCA los dos únicos programas que reciben calificaciones negativas y PCE es el programa que recibe la mejor valoración en cuanto al desempeño de los extensionistas de acuerdo con la apreciación de los campesinos. Sobresale que 74% de los campesinos manifestaron que están dispuestos a participar con el pago parcial de los honorarios del asesor técnico, 26% consideraron que esa es una obligación del gobierno. Respecto de la opinión que tienen los campesinos de las funciones que debe desempeñar un extensionista destacaron las siguientes: formular proyectos, gestionar apoyos, dar capacitación, organizar a los campesinos, poner en marcha empresas, dar asesoría técnica y proporcionar consultoría.

PROGRAMAS DE EXTENSIÓN RURAL EN EL SURESTE DE COAHUILA. PARTICIPACIÓN DE LOS EXTENSIONISTAS PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS

La totalidad de los extensionistas entrevistados manifestó haber participado en alguno o la mayoría de los programas sujetos de análisis de la presente investigación. Una tercera parte participó en PEAT, la totalidad en PCE y PESPRO, y cinco sextas partes en PRODESCA. Los asesores técnicos entrevistados que participaron en PEAT sólo lo hicieron en el primero de los cinco años que operó el programa, cambiándose en el segundo año a PCE. Ninguno de los entrevistados participó en PCE en 1996, año de su arranque, sumándose gradualmente en los años siguientes siendo hasta el 2000 cuando coinciden en el programa la totalidad con una duración promedio de tres años. En PESPRO también coinciden todos en 2001, único año en el que operó este programa. En el caso de PRODESCA que operó de 2002 a 2007 los asesores técnicos tuvieron una participación irregular, en 2002 fue menor, sólo una tercera parte, en contraste en 2006 fue la mayor con 83%.

En conjunto tuvieron una participación promedio de cuatro años en PRODESCA. Cabe destacar que por ser PCE un programa que garantizaba mayor permanencia a los técnicos, prefirieron participar en este en lugar de PEAT, sobre todo en virtud de que en PEAT los técnicos eran contratados por espacios no mayores a siete meses por año y en PCE la

contratación era por un año, además, contaban con mayores apoyos logísticos y económicos para realizar sus funciones.

En relación con las funciones que los extensionistas desarrollaron destaca que ninguno de los que participaron en PEAT menciona haber realizado un diagnóstico de la comunidad o grupos con los que trabajaron. En cambio, todos los extensionistas aceptan haber cubierto esa actividad en PCE. Lo anterior se explica porque en el primero no se exigía el diagnóstico, en cambio, era indispensable en PCE para la elaboración del plan de trabajo comunitario participativo que tenía que desarrollar cada extensionista.

También sobresale que la mitad de los técnicos en PESPRO y una quinta parte en PRODESCA reconocieron no haber realizado el citado diagnóstico cuando ambos programas así lo exigían, lo que es un indicativo de que algunos de ellos no cumplieron con la metodología. Todos los asesores técnicos que participaron en PEAT mencionan haber brindado asesoría técnica agrícola y la mitad de ellos pecuaria.

Destaca que los aspectos organizativos no fueron atendidos por los programas de manera adecuada, los técnicos de PEAT manifestaron no haber realizado esta función, una cifra cercana a 50% de los técnicos de PESPRO y PRODESCA tampoco lo hicieron. Por el contrario, la totalidad de los extensionistas que participaron en PCE manifiestan haber realizado actividades tendentes a fomentar la organización de los campesinos, aunque esta se hizo en torno a proyectos productivos o de inversión específicos, más que impulsarla como una estrategia comunitaria orientada a mejorar su relación con el entorno ambiental, socioeconómico e institucional, resultando que sólo algunos grupos incrementaron su capacidad de gestión de recursos económicos.

En relación con la formulación de proyectos, la mitad de los técnicos que participaron en PEAT mencionaron haber realizado al menos uno sin gestionar recursos económicos para su instrumentación, aunque al parecer ellos se refirieron a que obtuvieron apoyos para que en sus módulos de trabajo se estableciera una parcela demostrativa y se aplicara un paquete sanitario a todos los hatos caprinos de su área de influencia, lo que no necesariamente significa haber promovido proyectos de inversión entre los campesinos que les correspondió atender. En el caso de PCE y PRODESCA la totalidad de los técnicos manifestaron haber formulado proyectos, gestionado recursos económicos y realizado acciones de capacitación para su debida instrumentación. En el caso de PCE, la estrategia de intervención daba prioridad para el apoyo de los proyectos que formularan los extensionistas en beneficio de los grupos que atendían, lo que facilitaba que sus proyectos recibieran los apoyos solicitados.

En PRODESCA los pagos de apoyos estuvieron condicionados a la existencia de un proyecto, de lo contrario al técnico no le pagaban el servicio de diseño de empresas, por lo que es congruente la información proporcionada. En el caso de PESPRO 83% mencionó haber cumplido con lo anterior, lo que también se ajusta a la forma de operar de este programa, ya que si bien los técnicos priorizaban los proyectos, al igual que en el caso de PCE, no era obligatorio su formulación porque su pago era por tiempo y no por un servicio determinado.

El 83% de los técnicos de PCE, 67% de los que participaron en PESPRO y todos los de PRODESCA manifestaron haber puesto en marcha proyectos. Estos datos son congruentes con lo que se ha descrito, en los dos primeros casos la prioridad que se daba a los técnicos de alguna manera garantizaba la asignación de apoyos económicos y, en el último programa, el servicio de puesta en marcha venía acompañado con el diseño de empresas. Como se mencionó, los técnicos de PEAT indicaron haber realizado en promedio dos proyectos agrícolas y pecuarios, aunque más bien lo que hicieron fue establecer parcelas demostrativas y apoyar a los campesinos con un paquete sanitario consistente en la desparasitación interna y externa, además de vitaminar al ganado caprino. Ambas acciones están muy lejos de ser proyectos productivos. La nula formulación de proyectos también se debe a que los técnicos sólo participaron en el primero de los cinco años que duró en operación el programa.

El PCE tuvo la misma duración, aunque en el primer año ninguno de los entrevistados participó en él. En este programa fue donde los extensionistas tuvieron la oportunidad de realizar más proyectos, 83% elaboró de tipo agrícola con un promedio de siete por técnico, un porcentaje igual formuló proyectos pecuarios con un promedio de cuatro, 67% diseño proyectos silvícolas con un promedio de cuatro y 33% formuló proyectos no agropecuarios como talleres de costura, tortillerías, elaboración de productos de limpieza, panaderías, carnicerías, etcétera, con un promedio de tres. Como se mencionó, la estrategia permitía el concurso directo de estos proyectos en los programas de Equipamiento Rural y Programa de Apoyo al Desarrollo Rural (PADER) que en su oportunidad operaron como programas de desarrollo rural tendientes a apoyar las inversiones en activos fijos de los campesinos de menores recursos.

El PESPRO sólo operó en 2001, 83% de los extensionistas realizó proyectos agrícolas¹⁵ con un promedio por técnico de cuatro, igual porcentaje formuló proyectos pecuarios con un promedio de dos, 33% diseñó proyectos silvícolas con un promedio de dos, 16% elaboró proyectos agroindustriales, uno por técnico, igual porcentaje formuló proyectos no agropecuarios con un promedio de tres. La estrategia del programa también contempló el concurso directo de estos proyectos en PADER para la obtención de apoyos económicos que permitieran la instrumentación de los proyectos. Al igual que en el caso de los extensionistas de PCE, los mayoría de los que participaron en este programa tampoco diversificaron las ventanillas para la gestión de los proyectos que formularon para los campesinos que atendían.

Para cuando operó PESPRO, los extensionistas tenían bastante recorrido el camino para la identificación, formulación y gestión de recursos económicos para su instrumentación, por ello, aunque se puede apreciar que son menos los proyectos totales que se formularon en él, respecto a los de PCE, la razón es que fue menor el tiempo de existencia, porque por año operado son más los proyectos formulados en este programa. Además, mediante procesos de capacitación para su incorporación al Registro Federal de Trámites Empresariales (RFE), a los extensionistas se les insistió que en adelante su pago estaría en función de los proyectos autorizados para apoyo.

¹⁵Para evitar confusiones sobre la interpretación del promedio de proyectos elaborados por técnico, se hace referencia sólo a los extensionistas que participaron en la elaboración de cada tipo de proyectos y no al total de los técnicos entrevistados que participaron en el programa.

La totalidad de los entrevistados que participaron en PEAT y PCE mencionaron que fueron contratados por tiempo determinado, la mitad de los de PESPRO indicaron el mismo tipo de contratación, el resto que fue por servicio cubierto. Por su parte, todos los que participaron en PRODESCA contestaron que fueron contratados por tiempo cubierto. Cabe aclarar que hasta PESPRO todos los extensionistas fueron contratados por tiempo determinado y, a partir de PRODESCA, celebraron contratos por servicio autorizado.¹⁶

La totalidad de los extensionistas reconoció que la fuente de recursos para su pago provino de los programas. Cabe recordar que en los primeros años de SINDER se prohibió estrictamente a los extensionistas reclamar un cobro a los campesinos por los servicios que prestaban, so pena de ser dados de baja de los programas, lo que condicionó su comportamiento futuro y el de los campesinos, pues cuando autorizaron complementar sus ingresos mediante un pago parcial por parte de los campesinos, los primeros no los exigieron y los segundos no estuvieron de acuerdo en otorgárselos. Hoy en día, la gran mayoría de los extensionistas exigen un pago a los campesinos por iniciar un proyecto, a sabiendas de que no hay plena certeza de que serán apoyados por parte de los programas de SAGARPA y SFA.

OPINIÓN DE LOS PROGRAMAS

En relación con los beneficios que consideran se proporcionaron a los campesinos, la mitad de los extensionistas que participaron en PEAT refieren haber contribuido sólo en dos aspectos: mejorar sus conocimientos para la producción y los rendimientos. En el marco de PCE, PESPRO y PRODESCA la mayoría menciona que contribuyó con el primero de los citados beneficios y una minoría con el segundo. Todos los extensionistas que participaron en PCE coinciden en haber favorecido procesos organizativos y sólo una parte de ellos haberlo hecho en PESPRO y PRODESCA. También en diferentes porcentajes que van de 33.3 a 83.3%, los extensionistas mencionaron haber contribuido en el marco de los tres últimos programas para que los campesinos adquirieran maquinaria agrícola, mejoraran el manejo de su ganado, generaran empleos y promovieran la apropiación de los proyectos.

En porcentajes similares los extensionistas de PCE, PESPRO y PRODESCA mencionan haber elaborado proyectos que generaron ingresos económicos y empleos para los campesinos. En menor magnitud promovieron su mayor participación en el mercado. Lo anterior es una ratificación de que los extensionistas trabajaron básicamente para mejorar la productividad primaria sin plantearse como estrategia de desarrollo el beneficio o transformación de la producción agropecuaria, como tampoco trascender de la producción de autoconsumo a la comercial.

¹⁶Se observa que los cuatro diferentes servicios que apoyaba PRODESCA fueron: Diseño de Empresas, Puesta en Marcha, Capacitación y Consultoría.

Destacan los extremos entre PCE y PRODESCA en cuanto al impulso de procesos organizativos, en tanto que en el primero todos los entrevistados mencionan que tuvieron como función primordial impulsar procesos de carácter comunitario y micro regional, en el segundo sólo una minoría de los PSP reconoce haber promovido que los grupos específicos a los que les formuló los proyectos se integraran en grupos de trabajo y, en contados casos, los orientó para que adoptaran una personalidad jurídica propia.

La mayoría de los extensionistas manifestaron haber recibido capacitación para mejorar su desempeño como extensionistas, asesores técnicos y PSP en cada uno de los tres últimos programas. Ninguno de los extensionistas que participaron en PEAT y PCE reconoce que algún programa originó un impacto negativo entre los campesinos atendidos. Sin embargo, una minoría de los entrevistados menciona que en el marco de la operación de PESPRO y PRODESCA se dieron problemas de organización, malas inversiones, disminución de la producción, problemas de corrupción, pérdida de mercado y disminución de ingresos por venta.

Si bien la mayoría de los extensionistas reconocen haber influido para que los campesinos mejoraran sus procesos productivos y organizativos, reiteran que los procesos administrativos, empresariales y comerciales fueron marginalmente atendidos. Sobre los procesos administrativos, ya se expresó una opinión líneas arriba, respecto de los empresariales y comerciales se destaca que los proyectos impulsados estuvieron orientados a la producción primaria, que en lo agrícola se da primordialmente en cultivos básicos, en forma individual, bajo condiciones de temporal y, principalmente, para el autoconsumo; en lo pecuario se da fundamentalmente en especies menores con criollas, su principal alimento proviene de los agostaderos que no siempre se encuentran en buenas condiciones de vegetación y con un manejo sanitario deficiente, que lejos de verse como un reto a superar se ve como una limitante para cambiar la mentalidad de los campesinos y se les condena a seguir formando parte de los minifundistas del sector rural.

En relación con la opinión de los extensionistas respecto a la estrategia operativa de los programas, la mitad de los que participaron en PEAT la calificó bien y la otra mitad regular. En el caso de PCE una tercera parte la calificó como muy bien y proporciones iguales la calificaron como bien y regular. A la estrategia de PESPRO, una tercera parte la valoró bien, la mita regular y una sexta parte mala.

La de PRODESCA dos quintas partes la calificaron bien, una proporción igual regular y una quinta parte mala. El que la peor valoración operativa recaiga en PRODESCA y PESPRO obedece a que les fueron retirados apoyos para el mejor desempeño de los extensionistas, en el caso de PESPRO disminuyeron los apoyos económicos para la capacitación a campesinos, el establecimiento de módulos demostrativos, giras de intercambio tecnológico y de experiencias, entre otros aspectos. En el caso de PRODESCA esta situación se acentuó porque se cancelaron todos los apoyos para el cumplimiento de las funciones del PSP, a él le correspondía absorber los gastos de movilización, capacitación, reuniones de trabajo y todos los relacionados con la formulación y presentación de los proyectos, además, los relacionados con la integración de expedientes y desarrollo de cada uno de los servicios. Los que no contaban con vehículo propio o recursos económicos para invertir en estas actividades, simplemente dejaron de participar en el programa.

En relación con la valoración que hacen de los procesos administrativos, 100% de los técnicos de PEAT los calificaron regulares, en el caso de PCE una sexta parte muy bien, dos terceras partes bien y sólo una sexta parte lo calificó regular. Para PRODESCA la mitad valoró estos procedimientos bien, una tercera parte regular y una sexta parte malo. En el caso de PRODESCA sólo una quinta parte lo valoró bien, tres quintas partes regular y una quinta parte malo.

Estas valoraciones pueden tener las siguientes explicaciones. En el caso de PEAT todos los trámites administrativos se hacían en la Secretaría de Fomento Agropecuario (SFA) la cual tiene una estructura administrativa más compleja por la mayor cantidad de personal y las funciones que tiene que cumplir, lo que hizo más tardado y burocrático cada trámite. En el caso de PCE la mejor evaluación se puede explicar por el hecho de que el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural AC (INCA Rural) fue la institución en la que recayó la responsabilidad de la Vocalía de Capacitación y la Coordinación Operativa del programa, que tenía un trato directo con todos los extensionistas; en sus oficinas se realizaban las reuniones de trabajo, la mayoría de los eventos de capacitación donde se daba orientación para el trabajo y se resolvían los problemas que surgían, además era el lugar donde se le pagaba a los extensionistas, pago que se resolvía con relativa facilidad cuando el extensionista había reunido el expediente necesario, por lo que habiendo disponibilidad de recursos, el pago se realizaba en las fechas que correspondían.

Para la operación de PESPRO se contrató al despacho Desarrollo Sustentable de Microempresas Rurales (DESUMAR) para que desempeñara las funciones de la Vocalía Ejecutiva, un despacho foráneo que llegó a Coahuila al tiempo que iniciaba esta responsabilidad, por lo que su relación con el equipo técnico de PESPRO la tuvo que iniciar de cero, lo que seguramente influyó para la pobre valoración que aquí se hace. En el caso de PRODESCA la valoración que recibe es similar al programa anterior, lo que se debe a que los trámites administrativos regresaron a la SFA, que requería el visto bueno de SAGARPA para autorizar cualquier servicio y pago, lo que hizo más lento cualquier procedimiento.

Respecto a los programas que representaban una mejor relación laboral, los extensionistas refieren que en todos la contratación fue temporal, sin embargo, la gran mayoría de los que participaron en PCE reconoce que tenían seguridad y oportunidad en el pago, que contaban con apoyo de combustible para movilizarse, apoyo económico y logístico para el desempeño de sus funciones de capacitación, así como apoyos para su actualización profesional;¹⁷ una mínima parte de los extensionistas que participaron en PESPRO reconocen lo anterior. En el caso de PRODESCA sólo dos quintas partes consideran seguridad en el pago pero ninguno que sean oportunos, que hubieran recibido apoyo para movilización o apoyo logístico para sus actividades de capacitación, aunque una mínima parte también reconoce haber recibido apoyo económico para sus funciones y su actualización profesional. En el mismo sentido, se cuestionó a los extensionistas respecto de la oportunidad en los pagos, la totalidad de los técnicos que participaron en PEAT y PRODESCA mencionaron que siempre fue mucho después de la fecha programada.

¹⁷Los apoyos se refieren a lo siguiente: a) Apoyo logístico (equipo audiovisual, cámara fotográfica, papelería, etcétera); b) Apoyo económico para actividades asociadas al programa (reuniones, cursos, giras de intercambio tecnológico, parcelas demostrativas, etcétera), y c) Apoyo para la formación profesional (asistencia a cursos, congresos, diplomados, etcétera).

En el caso de PCE, dos terceras partes mencionaron que los pagos se realizaron cuando correspondía, una sexta parte que se hicieron después de la fecha formal para el pago y una cantidad igual que se hicieron mucho después de la fecha programada. En PESPRO sólo una sexta parte mencionó que les pagaron oportunamente, la mitad que lo hicieron después de la fecha programada y una tercera parte que lo hicieron mucho después de la fecha formal del pago. Estas valoraciones reiteran lo que se comentó en el sentido de que cuando el instituto responsable de atender los aspectos administrativos de los programas, incluyendo pagos, tenía una relación más directa con los extensionistas y los trámites en general fueron más rápidos.

Respecto a los montos de los pagos, los técnicos de PEAT lo consideraron regular, en el caso de PCE una sexta parte lo consideró muy bueno, una tercera parte bueno y la mitad regular. En relación con PESPRO, una sexta parte lo consideró muy bueno, el resto de los extensionistas participantes regular. En el caso de PRODESCA, dos quintas partes lo considero bueno y el resto malo. La baja valoración que reciben los montos pagados en PRODESCA obedece a que la estrategia adoptada por este programa consideraba un monto total, del cual los extensionistas tenían que deducir impuestos, costos de movilización, papelería, consumibles informáticos y otros necesarios para su desempeño en cada uno de los servicios autorizados, lo que termina disminuyendo su ingreso neto.

CONCLUSIONES

Conforme a los resultados anteriores se desprende que de los cuatro programas de extensión y asesoría técnica profesional, el más apropiado para impulsar procesos de desarrollo rural fue PCE, ya que contemplaba una estrategia operativa que concebía a la participación comunitaria como indispensable para desarrollar las actividades de extensión rural, que con algunas variantes, fue aplicado de manera exitosa en diferentes comunidades rurales del sureste de Coahuila. La asignación de extensionistas por grupos de comunidades pretendía ser un factor de cambio para los campesinos y sus familias, aunque en PEAT se refería exclusivamente a servicios de asesoría técnica agrícola, PCE concebía una estrategia de atención integral, ya que no sólo se refería a aspectos tecnológicos, sino además, buscaba promover procesos de capacitación y organización entre la población rural y, con ello, procuraba atender problemas que iban más allá de los aspectos productivos. Sin embargo, es de reconocerse que si bien existieron cambios positivos en las comunidades atendidas, no todos los campesinos llegaron a apropiarse de los procesos generándose vicios en el desempeño de los extensionistas que dieron lugar al fracaso de la estrategia de SINDER.

En particular, los extensionistas dejaron claro que PCE les ofrecía mejores condiciones para cumplir con sus actividades, ya que no sólo les brindaba más facilidades para desarrollar su trabajo, sino también una metodología para desempeñar sus funciones,

garantizándoles oficinas y otros apoyos logísticos para su quehacer como técnicos. El pago era más seguro y oportuno, la capacitación más pertinente a sus funciones. Sin embargo, existen expresiones de que PCE también toleró ineficiencia y promovió el conformismo en algunos de ellos.

Por su parte, ven en PRODESCA un programa que promueve el individualismo tanto en campesinos como en técnicos, que se ajusta a las nuevas políticas neoliberales donde las capacidades cognoscitivas y experiencia de los técnicos no son suficientes para salir adelante, se requiere tener un marco de relaciones que los favorezcan al momento de dictaminar los servicios.

En general, los extensionistas comentan la existencia de pirateo de proyectos facilitados por los mismos responsables de evaluarlos y dictaminarlos, señalan que las evaluaciones de desempeño deben ser más objetivas y disminuir el papeleo administrativo. Comentan que los campesinos deben aportar lo que les corresponda como estrategia para apropiarse de sus proyectos. La gran mayoría de los técnicos entrevistados sostienen que existe favoritismo en la aprobación de los proyectos de inversión y, en consecuencia, de la autorización de servicios profesionales, lo que distorsiona el ambiente competitivo que debería imperar en la revisión y dictaminen de los proyectos que se presentan.

Los técnicos participan en los programas de SAGARPA mientras se ubican en un mejor trabajo y, cuando lo logran, emigran de inmediato, viendo a PRODESCA como un programa que les puede generar un potencial de ingreso complementario, pero nunca como el ingreso principal de su ejercicio profesional. Siendo autocríticos, los extensionistas reconocen economías en la prestación de sus servicios profesionales, ya que el pago recibido incluye sus honorarios y todas las erogaciones necesarias para realizarlos, muchas veces afectan la calidad del servicio y procuran acudir con los grupos las menos veces posibles para ahorrarse gastos de combustible y mantenimiento de vehículo, hacer los menos eventos posibles para evitar gastos de papelería y apoyo logístico, lo que limita la comunicación entre los beneficiarios y el asesor técnico, consecuentemente, afecta para que los productos resultantes incorporen menos iniciativas y expectativas de los campesinos.

Las reiteradas referencias por parte de los campesinos para que se regrese al esquema de PCE son un reconocimiento de que esa estrategia es la que mejor permeó entre la población rural. Situación que debe valorarse para las futuras estrategias de desarrollo rural que se instrumenten. En este sentido, la extensión rural en PCE no sólo se consideró como un conjunto de acciones de asistencia técnica, capacitación técnica, comunicación y transferencia tecnológica, sino más bien como proceso de educación no formal para el desarrollo rural que exigió la participación organizada de los campesinos. No se limitó a la transmisión de conocimientos y técnicas para mejorar la productividad de sus actividades primarias basado en una estrategia de intervencionismo lineal y unidireccional, sino más bien dinámico y de doble vía, entendiendo por extensión el intercambio y retroalimentación, con amplia participación de los campesinos, de distintos conociemien-

tos y experiencias destinados a mejorar la capacidad de gestión de los recursos para el desarrollo.

Por tanto, la extensión no debe ser entendida sólo como un conjunto de acciones encaminadas a desarrollar habilidades y destrezas, vistas así serían actividades de alcance limitado y específico. No se aprende con la retórica en materia tecnológica de los extensionistas, más bien se aprende resolviendo problemas a través de la educación y en el trabajo. Queda claro que el productor construye mejor sus procesos de desarrollo cuando aplica su capacidad crítica para tomar decisiones y exige su participación en la ejecución de ellas.



BIBLIOGRAFÍA

Adesoji, S., "Assessment of agricultural extension agent's marketing-related services: Implications for policy makers" en Ekiti State, Nigeria. *Journal of Agricultural & Food Information*, 2009, 10(4):334-347.

Bjørnar, S., *Agricultural extension services and rural innovation in inner Scandinavia*, Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography, 2010. 64(1):1- 8.

Diario Oficial de Coahuila, 21 de abril de 2009.

Gobierno del estado de Coahuila, *Plan estatal de desarrollo 2000-2005*, Coahuila, México, 2000.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2009, *Cobertura temática: PIB por entidad federativa y por gran división de actividad económica*, México.

Quirós, C., Douthwaite, B., Roa J. y Ashby, J., "Colombia, Latin America and the spread of local agricultural research committees (CIALS): extension through farmer research", en W. Rivera y G. Alex (eds.), *Demand-Driven approaches to agriculture extension. Case studies of international initiatives*. Agriculture and Rural Development Discussion Paper 10, The World Bank, Washington, 2004. pp. 10-16.

Robertson, R. y Allen, V., George B., Emery, B., Creamer, N., Drinkwater, C. Gosz, J., Lynch, L., Havlin, J., Jackson, L., Pickett, S., Pitelka, L., Randall, A., Reed, S., Seastedt, T., Waide, R. y Wall, D., "Long-term agricultural research: a research, education, and extension imperative", en *BioScience*, 2008. 58(7):7640-645.

SAGARPA y CONASUPO, 1995, *Comisión Intersecretarial del Gabinete Agropecuario*, SAGARPA y CONASUPO, Alianza para el Campo, México.

Shabanali, F., Kalantari, K., Sharifzadeh, A. y Moradnezehadi, H., "Principal components of policy framework for sustainable agriculture and its implications for national extension system in Iran", en *Journal of Sustainable Agriculture*, 2007. 31(2):125-144.

Swanson, B. y Rajalahti, R., "Strengthening agricultural extension and advisory systems: Procedures for assessing, transforming, and evaluating extension systems", en *Agriculture and Rural Development*, Discussion Paper 45, The World Bank, Washington, 2010.

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y SEMARNAP, 1996, *Centro piloto del semidesierto para el desarrollo rural sustentable*, Buenavista, Saltillo, Coahuila.

Yurjevic, A., *El desarrollo rural en la perspectiva del desarrollo sustentable*, fecha de consulta: 6 de septiembre de 2010, http://www.clades.cl/documentos/ima_doc/desrural.pdf.

Zacharakis, J., "Extension and community: the practice of popular and progressive education", en *New Directions for Adult and Continuing Education*, 2008. 117:13-23.

